

SESIONES ORDINARIAS

2017

ORDEN DEL DÍA N° 1795

Impreso el día 7 de noviembre de 2017

Término del artículo 113: 16 de noviembre de 2017

COMISIONES DE LEGISLACIÓN PENAL
Y DE LEGISLACIÓN GENERAL

SUMARIO: **Régimen** de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional. Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado. (31-P.E.-2016.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General han considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el mensaje 127/16, de fecha 20 de octubre de 2016 y proyecto de ley tendiente a establecer un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional, tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su aceptación.

Sala de las comisiones, 7 de noviembre de 2017.

María G. Burgos. – Daniel A. Lipovetzky. Luis F. J. Cigogna. – Leandro López Koëmig. – Ricardo L. Alfonsín. – Karina V. Banfi. – Eduardo A. Cáceres. – Ana C. Carrizo. – María S. Carrizo. – Ana I. Copes. – María C. Cremer de Busti. – Néstor J. David. – Álvaro G. González. – Martín O. Hernández. – Anabela R. Hers Cabral. – Miguel Nanni. – Luis A. Petri. – Pedro J. Pretto. – Olga M. Rista. – Fernando Sánchez. – Cornelia Schmidt Liermann. – Pablo G. Tonelli.

En disidencia parcial:

Juan F. Brügge. – Gilberto O. Alegre. – Mónica E. Litza. – Carla B. Pitiot.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión estableciendo el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública y por Cohecho Transnacional, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – *Objeto y alcance.* La presente ley establece el Régimen de Responsabilidad Penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos:

- a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;
- b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas previstas por el artículo 265 del Código Penal;
- c) Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal;
- d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;
- e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Art. 2° – *Responsabilidad de las personas jurídicas.* Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.

También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquélla.

Art. 3° – *Responsabilidad sucesiva*. En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

Art. 4° – *Extinción de la acción*. La acción penal contra la persona jurídica sólo se extinguirá por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo 59 del Código Penal.

La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica.

Art. 5° – *Prescripción de la acción*. La acción penal respecto de las personas jurídicas prescribe a los seis (6) años de la comisión del delito.

A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión e interrupción de la acción penal que prevé el Código Penal.

Art. 6° – *Independencia de las acciones*. La persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica.

Art. 7° – *Penas*. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán las siguientes:

- 1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener.
- 2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
- 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
- 4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de

la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

- 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
- 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Art. 8° – *Graduación de la pena*. Para graduar las penas previstas en el artículo 7° de la presente ley, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes; la extensión del daño causado; el monto de dinero involucrado en la comisión del delito; el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna; el comportamiento posterior; la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia.

Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona jurídica sea sancionada por un delito cometido dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por los incisos 2 y 4 del artículo 7° de la presente ley.

El juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante un período de hasta cinco (5) años cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo.

No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal.

Art. 9° – *Exención de pena*. Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias:

- a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna;
- b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;
- c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.

Art. 10. – *Decomiso*. En todos los casos previstos en esta ley serán de aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en el Código Penal.

Art. 11. – *Situación procesal de la persona jurídica*. La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento en cuanto le sean aplicables.

Art. 12. – *Notificaciones*. Cuando la persona jurídica no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio que se conozca.

Art. 13. – *Representación*. La persona jurídica será representada por su representante legal o por cualquier persona con poder especial para el caso otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate, debiendo designar en cualquier caso abogado defensor. En caso de no hacerlo se le designará el defensor público que por turno corresponda.

El representante deberá informar el domicilio de la entidad y constituir domicilio procesal en la primera presentación. A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.

En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada, y podrá interrumpir el proceso dentro del límite de los plazos procesales correspondientes.

La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por su anterior representante.

Las facultades, número e intervención de los defensores que la asistan se regirán por las disposiciones procesales correspondientes.

Art. 14. – *Rebeldía*. En caso de incomparecencia a la citación, la persona jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal.

El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de Justicia o autoridad equivalente en las jurisdicciones locales, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.

Además, deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para asegurar la oportuna continuación y finalidad del proceso, de conformidad con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.

Art. 15. – *Conflicto de intereses. Abandono de la representación*. Si se detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona designada como representante, se intimará a aquella para que lo sustituya.

Art. 16. – *Acuerdo de Colaboración Eficaz*. La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquélla se obligue a cooperar, a través de la

revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.

Art. 17. – *Confidencialidad de la negociación*. La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el capítulo III, del título V, del libro segundo, del Código Penal.

Art. 18. – *Contenido del acuerdo*. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o datos a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio Público Fiscal, bajo las siguientes condiciones:

- a) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en el artículo 7º, inciso 1), de la presente ley;
- b) Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito; y
- c) Abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados, en caso de que recayera condena. Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse según las circunstancias del caso:
- d) Realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado;
- e) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;
- f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo;
- g) Implementar un programa de integridad en los términos de los artículos 22 y 23 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.

Art. 19. – *Forma y control judicial del acuerdo de colaboración*. El acuerdo se realizará por escrito. Llevará la firma del representante legal de la persona jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y será presentado ante el juez, quien evaluará la legalidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación, observación o rechazo.

Art. 20. – *Rechazo del acuerdo de colaboración*. Si el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese rechazado por el juez, la información y las pruebas aportadas por la persona jurídica durante la negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser empleadas judicialmente, excepto cuando el Ministerio

Público Fiscal hubiera tenido conocimiento de ella de forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz de un curso de investigación existente en la causa con anterioridad al acuerdo.

Art. 21. – *Control del cumplimiento del Acuerdo de Colaboración Eficaz.* Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el Ministerio Público Fiscal o el juez corroborarán la verosimilitud y utilidad de la información que hubiera proporcionado la persona jurídica en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.

Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, la sentencia deberá respetar las condiciones establecidas en el acuerdo, no pudiendo imponerse otras penas.

En caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales.

Art. 22. – *Programa de Integridad.* Las personas jurídicas comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

Art. 23. – *Contenido del Programa de Integridad.* El programa de integridad podrá contener, conforme a las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:

- a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
- b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
- c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados.

Asimismo, también podrá contener los siguientes elementos:

- I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad.

- II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia.

- III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.

- IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias.

- V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.

- VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.

- VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.

- VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad;

- IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad;

- X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.

Art. 24. – *Contrataciones con el Estado nacional.* La existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el marco de los contratos que:

- a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la autoridad competente con rango no menor a ministro; y
- b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado 1.023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o licencia de servicios públicos.

Art. 25. – *Registro Nacional de Reincidencia.* El Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación registrará las condenas que recayeran por los delitos previstos en la presente ley.

Art. 26. – *Competencia.* El juez competente para entender en la aplicación de penas a las personas jurídicas será el competente para entender en el delito por cuya comisión sea imputable la persona humana.

Art. 27. – *Aplicación complementaria.* La presente ley es complementaria del Código Penal.

Art. 28. – *Aplicación supletoria.* En los casos de competencia nacional y federal alcanzados por la presente ley, será de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a los lineamientos de la presente ley.

Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 1°: Este Código se aplicará:

1. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
2. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados autoridades argentinas en desempeño de su cargo.
3. Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquél fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el territorio argentino.

Art. 30. – Sustitúyese el artículo 258 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere, prometiére u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta.

Art. 31. – Incorpórase como artículo 259 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 259 bis: Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.

Art. 32. – Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

Art. 33. – Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 266: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 268 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

Art. 35. – Incorpórase como segundo párrafo al artículo 268 (1) del Código Penal el siguiente texto:

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del lucro obtenido.

Art. 36. – Modifícase el primer párrafo del artículo 268 (2) del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor

del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.

Art. 37. – Incorporase como artículo 300 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 300 bis: Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2°, del artículo 300, hubieren sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis, se impondrá pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor falseado en los documentos y actos a los que se refiere el inciso mencionado.

Art. 38. – Sustitúyese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, por el siguiente:

Artículo 33: El juez federal conocerá:

- 1) En la instrucción de los siguientes delitos:
 - a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros;
 - b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;
 - c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso;
 - d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital;
 - e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del Código Penal.

- 2) En el juzgamiento en instancia única de aquellos delitos señalados en el párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

Art. 39. – *Entrada en vigencia.* La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue aprobado en general y en particular por las dos terceras partes de los miembros presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.

FEDERICO PINEDO.

Juan P. Tunessi.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General al considerar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el mensaje 127/16, de fecha 20 de octubre de 2016 y proyecto de ley tendiente a establecer un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional, tipificado en el artículo 258 bis del Código Penal, se remiten a los conceptos vertidos en la reunión de comisión y que serán expuestos en la sesión de esta Honorable Cámara.

María G. Burgos.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 5 de julio de 2017.

Señora presidenta del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – *Objeto.* La presente ley establece el Régimen de Responsabilidad Penal para los delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por personas jurídicas privadas ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

Art. 2° – *Responsabilidad de la persona jurídica.* Las personas jurídicas son responsables por los delitos que hubieren sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudieran resultar beneficiadas, siempre que éstos fueren cometidos por:

- a) Cualquiera de sus dueños, socios, accionistas o asociados con influencia en la conformación de la voluntad social de la persona jurídica de que se trate;
- b) Cualquiera de sus apoderados, representantes, directores, gerentes, o cualquier otro miembro o empleado que se desempeñe bajo su supervisión o dirección;
- c) Cualquiera de sus representantes en contratos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso en los términos de los capítulos XVI, XVII, XVIII y XXX del título IV, del libro tercero del Código Civil y Comercial de la Nación.

Esta última disposición no será aplicable a aquellas personas jurídicas establecidas en los términos de la ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa, o aquella que la reemplace.

Las personas jurídicas no son responsables si la representación invocada fuera falsa, o si el delito hubiera sido cometido por una persona no contemplada en los incisos a), b) y c) salvo que la persona jurídica hubiera sido beneficiada con sus actos y lo ratificare expresa o tácitamente. Tampoco será responsable si las personas enunciadas en los incisos a), b) y c) del presente artículo actuaren en beneficio propio y no generaren provecho alguno para la persona jurídica.

Art. 3° – *Responsabilidad por actos de sociedades controladas*. Las sociedades controlantes son solidariamente responsables por las sanciones de carácter económico impuestas a sus controladas y por la reparación del daño causado.

Art. 4° – *Responsabilidad sucesoria*. En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

Art. 5° – *Extinción de la acción*. La acción penal contra la persona jurídica por los delitos contemplados en la presente ley se extingue:

- a) Por prescripción, de acuerdo a lo previsto para cada delito contemplado en la presente ley;
- b) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de colaboración eficaz, conforme lo establecido en el artículo 20 y concordantes de la presente ley.

Las causales de extinción de la acción penal establecidas en los incisos 6 y 7 del artículo 59 del Código Penal no son aplicables a las personas jurídicas.

La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal contra las personas jurídicas.

Art. 6° – *Prescripción de la acción*. La acción penal contra las personas jurídicas por los delitos contemplados en la presente prescribe de acuerdo a lo establecido

en el Código Penal para las personas humanas en cada delito.

Art. 7° – *Independencia de las acciones*. La persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la o las personas humanas que hubieren intervenido, y se acredite que el hecho ilícito ocurrió dentro del ámbito y funciones de las personas mencionadas en el artículo 2°.

Art. 8° – *Sanciones*. Las personas jurídicas siempre serán sancionadas con multa de entre el uno (1 %) y el diez por ciento (10 %) de los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 9° a 11 de la presente ley.

Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de doce (12) meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito serán sancionadas con multa de entre el uno por ciento (1 %) y el diez por ciento (10 %) de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.

Cuando el beneficio del ilícito fuere cuantificable económicamente el monto de la multa no podrá ser inferior al triple del beneficio. En ningún caso el monto de la multa podrá ser inferior al uno por ciento (1 %) de los ingresos a los que se refiere el primer párrafo de este artículo.

El monto de la sanción económica será debidamente actualizado por el tribunal de acuerdo al índice oficial cuya aplicación corresponda. El juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante un período de hasta cinco (5) años cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo. La sentencia condenatoria será publicada por dos (2) días a sus costas en dos diarios de mayor circulación provincial y nacional.

Además, las personas jurídicas podrán ser sancionadas, de forma conjunta o alternativa, a través de la aplicación de las siguientes sanciones:

- a) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
- b) Suspensión del uso de patentes y marcas, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
- c) Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare;
- d) Suspensión para acceder a beneficios o subsidios estatales, o para participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;

- e) Disolución y liquidación de la persona jurídica. Ésta sanción sólo podrá aplicarse si la persona jurídica hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituye su principal actividad.

No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal.

Si por razones de interés público fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, mantenimiento de las fuentes de trabajo y de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas en el inciso a) de este artículo.

Art. 9° – *Criterios para la determinación de las sanciones.* Las sanciones se determinarán de conformidad con los siguientes criterios:

- a) La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito;
- b) La comisión directa por propietarios, directivos o integrantes, o a través de representantes, apoderados o proveedores;
- c) La naturaleza, la dimensión y la capacidad económica de la persona jurídica;
- d) La gravedad del hecho ilícito;
- e) La posibilidad de que las sanciones ocasionen daños graves a la comunidad o a la prestación de un servicio público;
- f) La existencia y alcance de un sistema de control y supervisión interno de la persona jurídica;
- g) La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna;
- h) La cooperación prestada para el esclarecimiento del hecho, el comportamiento posterior, la disposición para mitigar o reparar el daño.

Art. 10. – *Circunstancias agravantes para la determinación de la pena.* La sanción de multa será de entre el diez por ciento (10 %) y el veinte por ciento (20 %) de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito si se verificara alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Si el delito se hubiera cometido con la intervención, el conocimiento o la tolerancia de miembros de la alta dirección;
- b) Si la comisión del delito hubiere provocado, directa o indirectamente, graves daños a la comunidad, perjuicios ambientales o en la prestación de un servicio público;
- c) Si la comisión del delito se hubiere mantenido de forma continuada en el tiempo;

- d) Existiese reincidencia en la comisión de los delitos abarcados por esta ley.

Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de los doce (12) meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, se aplicará la base de cálculo alternativa contemplada en el artículo 8°.

Cuando se acreditaran dos o más circunstancias de las precedentemente descritas, podrán aplicarse en forma conjunta a la multa la suspensión total o parcial de actividades; la suspensión del uso de patentes y marcas; la suspensión para acceder a beneficios o subsidios estatales o para participar en concursos o licitaciones públicas y en cualquier otra actividad vinculada con el Estado.

Las penas establecidas en el párrafo precedente serán de aplicación temporal, no pudiendo en ningún caso exceder los diez (10) años.

Si por razones de interés público fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o servicio en particular, no serán aplicables las sanciones referidas a la suspensión total o parcial de actividades ni las referidas a la suspensión del uso de patentes y marcas.

Art. 11. – *Circunstancias atenuantes.* La sanción de multa que correspondiere a la persona jurídica condenada en función de los criterios previstos en los artículos 9° y 10 será reducida de un tercio a la mitad si se verificara alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Antes del inicio del proceso, la persona jurídica hubiera colaborado voluntariamente para poner en conocimiento de las autoridades la existencia de los delitos previstos en esta ley;
- b) La persona jurídica hubiera implementado, con anterioridad a la comisión del delito, un programa de integridad adecuado en los términos de los artículos 29 y 30 de la presente ley.

La multa nunca podrá ser inferior al cero coma cinco por ciento (0,5 %) de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito o de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito para aquellas constituidas en el plazo de doce (12) meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.

Si se verificaran conjuntamente las circunstancias previstas en los incisos a) y b) de este artículo y se hubieran restituido los bienes y ganancias obtenidos como consecuencia de los hechos reconocidos y/o el valor equivalente, el tribunal podrá reducir y aun eximir a la persona jurídica de las sanciones relativas a la suspensión de las actividades, patentes o marcas y la suspensión para acceder a beneficios o subsidios estatales o para participar en concursos o licitaciones

públicos y en cualquier otra actividad vinculada con el Estado.

Art. 12. – *Decomiso*. En todos los casos en que recayese condena contra una persona jurídica, la misma decidirá el decomiso de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito de conformidad con el artículo 23 del Código Penal y/o de bienes por un valor equivalente, en caso de que aquello no sea posible, independientemente de las sanciones previstas en la ley.

Art. 13. – *Situación procesal de la persona jurídica*. La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento en cuanto le sean aplicables.

Art. 14. – *Notificaciones*. Cuando la persona jurídica no se hubiera presentado al proceso, las notificaciones se le cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio que se conozca.

Art. 15. – *Representación*. La persona jurídica será representada por cualquier persona con poder especial para el caso otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que se trate, debiendo designar en cualquier caso abogado defensor. En caso de no hacerlo se le designará defensor público que por turno corresponda.

El representante deberá informar el domicilio de la entidad y constituir domicilio procesal en la primera presentación. A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.

En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada, y no habrá de interrumpir el proceso por más de tres (3) días hábiles.

La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por su anterior representante.

Art. 16. – *Citación por edictos*. Si no hubiera sido posible notificar a la persona jurídica, el juez la citará mediante la publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial de la República Argentina y por dos (2) días en un diario de circulación nacional. Los edictos identificarán la causa en la que se la cita, la fiscalía que la cita, el juez que interviene en el caso, el plazo de citación y la advertencia de que, en caso de no presentarse, se la declarará rebelde y se continuará el trámite hasta la sentencia definitiva.

Art. 17. – *Rebeldía*. En caso de incomparecencia a la citación por edictos, la persona jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal.

El juez procederá a anotar su rebeldía. El fiscal solicitará al Ministerio Público de la Defensa que le designe un defensor público para que ejerza su defensa en juicio. Una vez designado, el fiscal le comunicará la imputación.

El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de Justicia o autoridad equivalente en las jurisdicciones locales y a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además, deberá solicitar las medidas cautelares necesarias para asegurar la continuación y finalidad del proceso.

En cualquier momento del proceso, la persona jurídica se podrá presentar, y en consecuencia cesará la intervención del defensor público, sin perjuicio de la eficacia de los actos cumplidos y las medidas preventivas aplicadas como consecuencia de su declaración de rebeldía.

Art. 18. – *Conflicto de intereses*. Si el fiscal o el juez detectaren la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica y la persona designada como representante, intimará a aquélla para que lo sustituya en el plazo de cinco (5) días.

Si no la sustituyere, el fiscal o el juez solicitarán al Ministerio Público de la Defensa la designación de un defensor público para que ejerza su defensa.

Art. 19. – *Abandono de la representación*. Si en el curso de la investigación se produjere el abandono de la función por el representante, el fiscal solicitará al Ministerio Público de la Defensa la designación de un defensor público hasta tanto la persona jurídica designe un nuevo representante.

Art. 20. – *Acuerdo de colaboración eficaz*. El Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual ésta se obligue a colaborar, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 22 de la presente.

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.

Art. 21. – *Confidencialidad de la negociación*. La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible de aplicación de lo previsto en el capítulo III, “Violación de secretos y de la privacidad”, del título IV, del libro segundo, del Código Penal.

Art. 22. – *Contenido del acuerdo*. En el acuerdo se identificará el tipo de información, o datos a brindar o pruebas a aportar por la persona jurídica al Ministerio Público Fiscal.

Se establecerán las siguientes condiciones:

- a) El pago de una suma de dinero en concepto de medida reparatoria integral que no podrá ser inferior al cero coma uno por ciento (0,1 %) de los ingresos brutos anuales que la persona

jurídica hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la fecha de los hechos que motivan el acuerdo;

- b) La restitución de los bienes o ganancias obtenidos como consecuencia de los hechos reconocidos y/o el valor equivalente.
- c) La suspensión de la persecución penal de las personas jurídicas.

Asimismo, podrán establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran acordarse según las circunstancias del caso:

- d) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;
- e) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo;
- f) Implementar un programa de integridad en los términos del artículo 30 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.

La persona jurídica quedará sujeta al cumplimiento de estas condiciones dentro de un período máximo de tres (3) años.

De no registrar la persona jurídica ingresos en el período inmediato anterior se procederá del modo previsto en el artículo 8°. De no contarse de ninguna base para el cálculo el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán igualmente acordar un monto de medida reparatoria integral acorde a las características del hecho investigado, la colaboración prestada y el acuerdo alcanzado.

Art. 23. – *Forma del acuerdo de colaboración.* El acuerdo se realizará por escrito. Llevará la firma del representante legal de la persona jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio Público Fiscal, y será presentado ante el juez, quien evaluará la legalidad y razonabilidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su aprobación o rechazo.

Art. 24. – *Publicidad de las condiciones.* Las condiciones acordadas en virtud de lo previsto en el artículo 22, aprobadas por el juez, tendrán carácter público.

Art. 25. – *Control y utilización de la prueba.* Las pruebas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal como resultado del acuerdo, así como las diligencias probatorias que se realicen a partir de la información o datos allí obtenidos serán controlables por las partes. Sólo podrán ser utilizadas en el proceso que motiva la colaboración o en otro conexo.

Art. 26. – *Rechazo del acuerdo de colaboración.* Si el acuerdo de colaboración eficaz no prosperase o fuese rechazado por el juez, la información y las pruebas aportadas por la persona jurídica durante la negociación le serán devueltas, sin retención de copias. El uso de dicha información y documentación estará vedado para la determinación de responsabilidad de la persona jurídica, excepto cuando el Ministerio Público

Fiscal hubiera tenido conocimiento de ella de forma independiente o hubiera podido obtenerla a raíz de un curso de investigación existente en la causa con anterioridad al acuerdo.

Art. 27. – *Control del cumplimiento del acuerdo de colaboración.* El juez controlará el cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz. Si la persona jurídica incumpliere las condiciones establecidas, el juez decidirá, previa audiencia en la cual oír a las partes del acuerdo, su continuidad, modificación o revocación. El acuerdo de colaboración eficaz también podrá ser revocado si la persona jurídica fuere condenada por la comisión de otro delito comprendido por esta ley durante el plazo de cumplimiento del acuerdo.

En caso de revocación, el proceso continuará de acuerdo a las reglas generales.

Art. 28. – *Producto de la multa.* El producto de las multas o medidas reparatorias integrales obtenidos por la aplicación de esta ley será distribuido en partes iguales entre:

- a) El Ministerio de Educación y Deportes, que lo destinará a inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa;
- b) El Ministerio de Salud, que lo destinará a inversión en infraestructura y equipamiento en materia sanitaria.

Si el delito fuere cometido en perjuicio o fraude de la administración pública provincial serán éstas las competentes para designar el destino del producto de las multas.

En los casos de delitos cuya regulación especial establecen destinos específicos al producto de las multas o medidas reparatorias integrales, no será de aplicación el presente artículo.

Art. 29. – *Programa de integridad.* Se considera que un programa de integridad es adecuado cuando guarda relación con los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica, con su dimensión, y con su capacidad económica, a los fines de prevenir, detectar, corregir y poner en conocimiento ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por esta ley.

No podrá ser alegado como causal de atenuación cuando de la evaluación efectuada por el juez surgiera que el programa falló en el caso concreto por falta de aplicación, de seguimiento o de supervisión.

Art. 30. – *Contenido del programa de integridad.* El programa de integridad podrá contener, entre otros, los siguientes elementos:

- a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal

de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;

- b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
- c) La extensión en la aplicación del código de ética o de conducta, o de las políticas y procedimientos de integridad, cuando sea necesario en función de los riesgos existentes, a terceros o socios de negocios, tales como proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios;
- d) La realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores, empleados y terceros o socios de negocios;
- e) El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad;
- f) El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia;
- g) Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;
- h) Una política de protección de denunciantes contra represalias;
- i) Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta;
- j) Procedimientos que comprueben la integridad y reputación de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial;
- k) La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas;
- l) El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad;
- m) Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa de integridad.

Art. 31. – *Registro Nacional de Personas Jurídicas Sancionadas.* Créase en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sancionadas (RENPEJS).

El RENPEJS tendrá carácter público, será de fácil acceso a través de la página web y contendrá la siguiente información sobre personas jurídicas que hayan sido condenadas penalmente con sentencia firme:

- a) Razón social o denominación;
- b) Marcas o patentes que exploten y estén asociadas al hecho por el cual fueron condenadas;
- c) Delito por el cual han sido sancionadas;
- d) Sanción aplicada;
- e) Resolución judicial que impuso la sanción.

La información pública mencionada en el presente artículo obrará en el Registro para su consulta pública hasta diez (10) años después de cumplida la condena impuesta.

Art. 32. – *Aplicación complementaria.* La presente ley es complementaria del Código Penal.

Art. 33. – *Aplicación supletoria.* En los casos de competencia nacional y federal alcanzados por la presente ley será de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.

En el caso de competencia provincial será aplicable supletoriamente el Código Procesal Penal de la respectiva provincia.

Invítase a las provincias a adherir a las normas establecidas en los artículos 13 a 19 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación analógica de dichas normas que los jueces provinciales pudieran efectuar a los fines de juzgar los hechos que les lleguen a su conocimiento a partir de su entrada en vigencia.

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 1°: Este código se aplicará:

1° – Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

2° – Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.

3° – Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero, por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquel fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el territorio argentino.

Art. 35. – Sustitúyese el artículo 258 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor

pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Se impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a diez (10) veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.

Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta.

Art. 36. – *Entrada en vigencia.* La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, con excepción de los artículos 34 y 35 que entrarán en vigencia el día de su publicación.

Art. 37. – Modifícase el artículo 62 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 62: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1° – A los quince (15) años, cuando se trate de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;
- 2° – Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce (12) años ni bajar de dos (2) años;
- 3° – A los cinco (5) años, cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4° – Al año, cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
- 5° – A los dos (2) años, cuando se trate de hechos reprimidos con multa.

Quedan exceptuados y son imprescriptibles los delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII y IX del título XI y en el inciso 5 del artículo 174 de este Código.

Art. 38. – Modifícanse los artículos 256, 256 bis, 258, 258 bis, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 268 y 268 (2) del Código Penal los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 256: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilita-

ción especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a quince (15) años.

Artículo 258: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciera u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de reclusión o prisión de cinco (5) a doce (12) años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Artículo 258 bis: Será reprimido con reclusión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Artículo 259: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año.

Artículo 260: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial

perpetua, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados.

Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte (20 %) al cincuenta por ciento (50 %) de la cantidad distraída.

Artículo 261: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

Artículo 266: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Artículo 267: Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta veinte (20) años.

Artículo 268: Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años e inhabilitación absoluta

perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa del cincuenta por ciento (50 %) al ciento por ciento (100 %) del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.

EMILIO MONZÓ.

Eugenio Inchausti.

Buenos Aires, 14 de julio de 2017.

Señora presidenta del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, a fin de poner en su conocimiento que en la sanción de la sesión de fecha 5 de julio de 2017, sobre Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y cohecho transnacional, expediente 31-P.E.-2016, Orden del Día N° 1.367, en el artículo 35 y en el artículo 38 se sustituye el artículo 258 bis del Código Penal de la Nación con textos que difieren entre sí, habiendo sido aprobado por el pleno de esa manera.

Saludo a usted atentamente.

EMILIO MONZÓ.

Eugenio Inchausti.